

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Luz Miriam Betancur Álvarez – Juan David Valencia Betancur y Natalia Valencia Betancur
DEMANDADO	Colpensiones
Litisconsorte necesario por pasiva	Hernando Montoya Gallo
PROCEDENCIA	Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 3105 013 2016 00850 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 018 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión sobrevivientes de origen común - condición más beneficiosa – sumatoria de tiempo público y privado – intereses moratorios
DECISIÓN	Revoca costas y confirma en lo demás

Hoy, **veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, dispuesto en sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luz Miriam Betancur Álvarez, Juan David Valencia Betancur y Natalia Valencia Betancur**, donde se dispuso la integración como litisconsorte necesario por pasiva al señor **Hernando Montoya Gallo**, código de radicado único nacional 05001 3105 **013 2016 00850** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes

de la Sala el proyecto discutido y aprobado en acta N° **003**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que los demandantes convocaron a juicio a Colpensiones, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 7 de mayo de 1997, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios y las costas del proceso.

En sustento manifestaron que los señores José Rubiel Valencia Montes y Luz Miriam Betancur, contrajeron matrimonio el 6 de julio de 1990, naciendo de dicha unión Juan David y Natalia; que la pareja compartió techo, lecho y mesa hasta el 7 de mayo de 1997, cuando se dio el fallecimiento del señor José Rubiel; que el 3 de agosto de 2012 solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante Resolución GNR 165072 del 2 de julio de 2013, al considerar que solo contaba con 131 semanas cotizadas al momento de la muerte a más que se encontraba afiliado a HORIZONTE, decisión que fue reiterada en acto administrativo GNR 176418 del 16 de junio de 2015 y GNR 282491 del 15 de septiembre de 2015, no obstante, en la última se realizó un incremento en el número de semanas aportadas; que José Rubiel trabajó para el Municipio de Nariño Ant., entre el 2 de enero de 1992 y el 28 de septiembre de 1996.

Mediante auto del **24 de agosto de 2016**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente notificada Colpensiones, dentro del término para ello, allegó escrito de contestación, aceptando la fecha de fallecimiento del señor José Rubiel, el matrimonio de este y la señora Luz Marina, la procreación en dicha unión de Natalia y Juan David, la solicitud

de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y las decisiones negativas, al no cumplir con el requisito de 26 semanas en el año anterior al deceso. Los demás supuestos no le constan, debiendo probarse. **Se opuso a la prosperidad de las pretensiones** al considerar que el afiliado fallecido no dejó cotizadas 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha del óbito. Finalmente, formuló excepciones de fondo que denominó: inexistencia de la obligación por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, improcedencia de los intereses moratorios, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, innominada y descuento del aporte a salud.

El 02 de agosto de 2018, el juzgado de conocimiento emitió sentencia, absolviendo a Colpensiones de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra, al encontrar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, decisión que fue declarada nula por las hoy integrantes de esta Sala, en providencia del 23 de enero de 2019, ordenándose la vinculación como litisconsorte necesario por pasiva del señor Hernando Montoya, como supuesto empleador del señor José Rubiel Valencia Montes, y de la ARL a la cual estuviere afiliado el fallecido.

Una vez notificado el señor **Hernando Montoya Gallo**, de la existencia del proceso, procedió a su contestación, indicando que al no estar relacionado en los hechos de la demanda como persona responsable de vínculo laboral alguno, se atiene a lo que resulte probado. **Frente a las pretensiones** indicó que al no haber tenido relación laboral con el señor José Rubiel, quedan sin piso jurídico. Por último, propuso como medio de defensa el de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Mediante auto del 19 de mayo de 2022, el juzgado de conocimiento indicó *"atendiendo a que el despacho realizó todas las acciones tendientes a cumplir la orden*

impartida por el superior para integrar al proceso a la ARL a la que estuviese afiliado el causante, señor José Rubiel Valencia Montes, y aun cuando se exhortó a todas las ARL del país, a FASECOLDA y Ministerio de Salud y Protección Social, el causante no estuvo afiliado al sistema de seguridad social de riesgos laborales, contexto en el cual se cumple lo dispuesto por el superior”.

La primera instancia culminó con **sentencia**, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, en la que declaró que el fallecimiento del señor José Rubiel Valencia Montes, es de origen común, asistiéndole derecho a la señora Luz Miriam Betancur y Juan David Valencia, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo y padre, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, computando, para efecto de densidad de semanas, el tiempo público y privado. Condenó a Colpensiones a cancelar a la señora Luz Miriam la suma de **\$114.569.167,00** a título de retroactivo por el 50% de la cuota parte pensional, desde el 3 de agosto de 2009 hasta el 27 de mayo de 2014, y de 100% de la mesada pensional del 28 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2022, con la inclusión de las mesadas adicionales de junio y diciembre. A partir del 1º de enero de 2023, se continuará pagando una mesada equivalente al mínimo legal mensual vigente. Condenar a Colpensiones, a cancelarle la suma de \$32.697.156, a Juan David Valencia a título de retroactivo en equivalente al 25% de la mesada pensional causada entre el 7 de mayo de 1997 y el 27 de julio de 2009, y del 50% del 28 de julio de 2009 al 27 de mayo de 2014. Dispuso la indexación de las sumas adeudadas. Autorizó el descuento de los aportes a salud de las mesadas. Absolvió de las restantes pretensiones, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción frente a Luz Miriam Betancur y total frente a Natalia Valencia Betancur.

Para fundamentar su decisión, argumentó la juez es un juicioso análisis, que si bien inicialmente la señora Luz Miriam Betancur, confesó en el interrogatorio la presencia de un accidente de trabajo, supuesto expuesto

también por los testigos allegados, también lo es que atendiendo el análisis probatorio, según las reglas de la sana crítica, se **puedo concluir que la circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrió el deceso el señor José son de origen común**, al no existir medio de convicción alguno que acredite la existencia del vínculo laboral entre el fallecido y el señor Hernando Montoya, **pues, no se demostró mínimamente la prestación personal del servicio a fin de darle aplicación a la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T. siendo Colpensiones la entidad encargada del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.**

Dispuso el pago de la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, al acreditar 271,28 semanas en los seis años anteriores al deceso, es decir, entre el 7 de mayo de 1991 y el mismo día y mes de 1997, así como 244,42 semanas en los seis años anteriores al 01 de abril de 1994, teniendo en cuenta el tiempo cotizado ante Colpensiones y el de servicio público, de acuerdo con la sentencia SU769-2014, y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras en la SL4121-2021, adicional a que encontró demostrada, con la prueba documental y testimonial aportada, el requisito de convivencia entre José y Luz Miriam, en los siete años anteriores a la fecha del deceso del afiliado, así como la filiación entre el señor José y sus hijos Natalia y Juan David Montes, disponiendo el reconocimiento y pago de la prestación a favor de la cónyuge a partir del 3 de agosto de 2009, al haberse efectuado la reclamación el 3 de agosto de 2012 y, con ello, interrupción de la prescripción. A Juan David, se la otorgó a partir del deceso de su padre, por haber demandado dentro de los tres años siguientes al levantamiento de la suspensión de la prescripción, habiendo cumplido los 18 años el 27 de mayo de 2014, sin que se hubiese acreditado escolaridad para su concesión hasta los 25 años. En el caso de

Natalia Valencia, absolvió del pago de la prestación ante la configuración de la prescripción al haber arribado a los 18 años el 27 de julio de 2009, y tener hasta el mismo día y mes de 2012, para reclamar, herramienta de la cual solo hizo uso hasta el 22 de septiembre de 2017.

Absolvió del pago de los intereses moratorios, al reconocerse la prestación en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, así como sumatoria de tiempo público y privado, tesis no imperantes para la fecha en que se dio el deceso del señor José, en tanto, **solo hasta la sentencia SL5147-2020, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, acogió dicho criterio**, el cual, venía aplicando la Corte Constitucional desde la SU769-2014, disponiendo, en consecuencia, la actualización de las sumas adeudadas a través del mecanismos de la indexación.

Inconforme con la anterior decisión el apoderado de la parte demandante interpuso **recurso de apelación**, solicitando se revoque la sentencia en cuanto absolvió del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al haber tenido conocimiento Colpensiones, para la fecha en que se elevó la solicitud, de la jurisprudencia de las altas Cortes, frente al pago de la pensión de sobrevivientes en aplicación de los principios constitucionales.

En favor de Colpensiones se conoce en el grado jurisdiccional de consulta

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso la **demandante**, afirmando que es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios ante la tardanza de Colpensiones en la cancelación de las mesadas, máxime si se tiene en cuenta que la prestación se dejó causada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Colpensiones, esgrime que cuando el afiliado fallece en un accidente de trabajo es necesario que la empresa lo haya afiliado al sistema de seguridad social para que pueda acceder a la pensión de sobrevivientes sus beneficiarios, siendo la Arl la entidad que debe responder por el pago de la prestación y, en caso de no haberse efectuado la afiliación es al empleador al que le compete asumir el todos los gastos generados con el accidente, enfermedad, invalidez o muerte.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Son hechos debidamente acreditados en los autos, que el señor José Rubiel Valencia Montes y Luz Miriam Betancur Álvarez contrajeron matrimonio el 6 de julio de 1990 y que en dicha unión procrearon a Natalia y Juan David Valencia Betancur, naciendo la primera el 27 de julio de 1991, y el segundo, el 27 de mayo de 1996; según certificado de información laboral para bono pensional, el señor José **laboró al Municipio de Nariño entre el 2 de enero de 1992 al 28 de septiembre de 1996**, y también efectuó **aportes interrumpidos al régimen de prima media con prestación definida entre el 02 de junio de 1989 y el 31 de agosto de 1996, para un total de 187,13 semanas**; el señor José Rubiel **falleció el 7 de mayo de 1997**; el 3 de agosto de 2012 se solicitó por parte de la señora Luz Miriam el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante las resoluciones GNR 165072 de 2013, GNR 176418 de 2015 y GNR 282491 de 2015, en esta última, y después de dejar atrás la discusión sobre multivinculación del señor José Rubiel, se definió que la prestación no se reconocía al no haberse dejado acreditado el requisito de las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al deceso; que el 6 de enero de 2016 insistió en el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes la

señora Luz Miriam, siendo negada en Resolución GNR74084 del 9 de marzo de 2016, confirmada por la GNR141473 del 13 mayo de 2016.

Planteadas, así las cosas, y atendiendo lo expuesto en el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, el **problema jurídico** gira en torno a establecer, en primer lugar, si el origen del accidente sufrido por el señor José Rubiel Valencia, es de origen laboral o común, determinándose para ello, si existió o no un vínculo laboral entre José Valencia y Hernando Montoya Gallo. De igual forma se analizará si es procedente darle aplicación al principio de la condición más beneficiosa y sumatoria de tiempo público y privado, en caso afirmativo si el afiliado fallecido dejó causada la pensión de sobreviviente en favor de sus beneficiarios, y de ser cierto se determinará si hay o no lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Pues bien, sea lo primero recordar que a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento *"inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes"* (Sentencia SL4035-2021, SL4096-2021, donde se reitera lo expuesto en la SL15058-2017).

Así las cosas, habiéndose declarado nulidad de la sentencia a fin de esclarecer los hechos que soportan la acción, teniendo en cuenta que la señora Luz Miriam Betancur, José Saúl Zuleta y Ana Mercedes Álvarez, manifestaron que el señor José falleció cuando se encontraba manejando la volqueta del señor Hernando Montoya, dada la existencia de un vínculo laboral entre ellos, fue que se ordenó la vinculación de este, para

corroborar el vínculo laboral existente, y así establecer con claridad si lo ocurrido fue un accidente laboral.

Para esclarecer dicho supuesto, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, ha indicado de manera pacífica y reiterada que resulta indispensable que se acredite para la declaratoria de relación laboral, la prestación personal del servicio por quien alega ser trabajador, explicándose en la sentencia SL4518-2021 al citar la SL16528-2016, que:

"Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral." (Subraya intencionales de la Sala)

Así entonces, es relevante la demostración de la prestación personal del servicio, pues con este entra a operar la presunción de contrato de trabajo contemplada en el artículo 24 de la misma obra, como una ventaja probatoria a favor de la parte más débil de la relación laboral, que puede ser desvirtuada por la contraparte, demostrando que se trata de un vínculo regido por norma disímil o que el mismo no se dio, evidenciándose para el caso, que no se logra establecer el elemento determinante de la prestación personal del servicio, en tanto, si bien la señora Ana Mercedes Álvarez Grisales, antes de declararse la nulidad de la sentencia adujo que para la fecha en que José falleció se encontraba laborando para Hernando, y José Saúl Zuleta Álvarez, afirmó que José falleció cuando se encontraba conduciendo la volqueta del señor Montoya, al haber sido este su empleo, también lo es, que este no vivía en el Municipio de Nariño cuando ocurrió

el evento, conociendo del fallecimiento de José por una llamada de un familiar de su esposa, y al recibir de nuevo el testimonio de la señora Ana Mercedes a fin de garantizarle la contradicción al señor Hernando Montoya, quien fue vinculado al proceso, esta manifestó que no tenía conocimiento directo que entre José y Hernando hubiese existido una relación laboral, sumado a que si bien sabía que José laboraba haciendo viajes en diferentes vehículos, falleciendo mientras se encontraba ejecutando uno, conoce de ello porque se lo contaron.

Y si bien el señor Sigifredo Panesso Betancur, manifestó que José Rubiel trabajó para el Municipio de Nariño, y después de que se salió laboró para el señor Hernando Montoya como unos 7 u 8 meses, al requerírsele para que indicara por qué sabía eso, expuso que, porque el señor Hernando era muy conocido en el Municipio y porque José manejaba su volqueta, sin constarle qué tipo de contrato tenía, al no habérselo manifestado José, así como tampoco cuánto ganaba, constándole que se encontraba laborando el día del accidente, solo por comentarios realizados en el Municipio, sin haber visitado el parqueadero donde estacionaban la volqueta y de donde la sacó el día del accidente el señor José, lugar, en donde llevaban todos los vehículos del Municipio y donde tenían que dejar las llaves para que cualquier persona los moviera en caso de que estuvieran estorbando para otro carro o en caso de que ocurriera alguna eventualidad.

Adicional a ello, Jorge Iván Pérez Pérez, de profesión conductor, afirmó que conoce a Hernando hace más de 56 años, y que en razón a ello, y a que guardaba sus vehículos en el parqueadero donde también los dejaba Hernando y en el cual es exigencia dejar las llaves, le consta que este se ha dedicado al manejar automotores de su propiedad, así como que para la fecha del deceso de José, este no se encontraba laborando para Hernando, al ser, el mismo Hernando el que la conducía. Y, Alberto de Jesús Echeverri, quien conoce a Hernando hace 50 o 60 años al ser ambos

del Municipio de Nariño, indicó que entre Hernando y José no existió ningún tipo de vínculo laboral, al conducir, el primero, sus propios vehículos, adicionalmente afirma que en el parqueadero donde estacionaba la volqueta Hernando debían dejar las llaves, pudiendo, cualquier persona, mover el vehículo.

De acuerdo con los medios de convicción obrante en el plenario, se tiene que no se encuentran elementos que demuestren que efectivamente el señor José le prestó sus servicios al señor Hernando, a fin de que pueda entra a operar la presunción de contrato de trabajo contemplada en el artículo 24 del C.S.T., y con ello establecer la existencia de un accidente de trabajo, debiendo con ello, responder Colpensiones por las prestaciones a que haya lugar, al considerarse el evento como muerte de origen común, punto en el que se confirma la sentencia de instancia.

Establecido lo anterior, pasa a determinar la **procedencia o no del pago de la pensión de sobrevivientes**. Siendo la fecha de fallecimiento del afiliado el **7 de mayo de 1997**, la norma a observar para definir el derecho lo es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, disposición que ordenaba para dejar causado el mismo, acreditar alguno de los siguientes requisitos: "*a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema. Hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte*", supuesto que no satisfizo el fallecido, situación frente a la cual no hay discusión pues así fue considerado por Colpensiones y la Juez de conocimiento, sin presentarse inconformidad frente a tal punto.

Sabiendo lo anterior, y al haberse concedido la pensión en primera instancia en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, es dable advertir que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha

expuesto en las sentencias SL4190-2022, SL3104-2022, SL2843-2021, SL2567-2021, SL3010-2020, SL1142-2020, SL356-2019, SL763-2018, SL2183-2018, SL10013-2017, SL4080-2017, SL8614-2017, SL 2150-2017, SL8085-2015, SL6657-2015, SL6640-2015, SL11548-2015 y SL405-2013 entre otras, que procede la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, como excepción a la regla general, en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993.

Conforme lo ha señalado el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, cuando en el cambio normativo el legislador no haya previsto un régimen de transición y ocurre una modificación sustancial en los requisitos legales para acceder a la prestación, tal y como aconteció respecto de la pensión de sobrevivientes al expedirse la Ley 100 de 1993, si se cumplen las exigencias de la normativa inmediatamente anterior - Acuerdo 049 de 1990- en el número mínimo de cotizaciones, aunque el riesgo se estructure bajo la reglamentación posterior, puede acudir a aquella en aras de proteger una expectativa legítima.

Así, las reglas y principios orientadores de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, relacionados con la condición más beneficiosa, cuando el causante muere en vigencia de la Ley 100 de 1993 original, se pueden sintetizar en que se deben acreditar unos supuestos a saber: **1)** 300 semanas cotizadas en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez y que para el caso de la pensión de sobrevivientes es con antelación al fallecimiento, deben estar satisfechas al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir, 1 de abril de 1994. **2)** 150 semanas cotizadas, sobre este punto hay que diferenciar dos momentos: a) Los afiliados que fallecieron entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2000 y, b) Los afiliados que murieron después del 31 de marzo de 2000. Frente a este requisito, en sentencia SL11548-2015, el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, manifestó:

"Respecto de las ciento cincuenta (150) semanas cotizadas dentro de los seis (6) años anteriores al estado de invalidez –y que igualmente para el caso de la pensión de sobrevivientes, son anteriores al fallecimiento-, esa densidad debe estar satisfecha pero contabilizando ese tiempo desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, y adicionalmente tener esa misma densidad en los seis (6) años anteriores a su fallecimiento. (...)

Dos precisiones cabe hacer, entonces, sobre el criterio jurisprudencial vigente en torno a las ciento cincuenta (150) semanas, así: La primera, para quienes fallecen antes del 31 de marzo de 2000 pero después del 1º de abril de 1994, deben haber cumplido con esa densidad dentro de los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, e igualmente esa misma densidad dentro de los seis años anteriores a su fallecimiento, permitiéndose la suma de semanas cotizadas tanto antes como después de la Ley 100 de 1993; la segunda, para quienes fallecen después del 31 de marzo de 2000, deben haber satisfecho esa densidad dentro de los seis años anteriores al 1º de abril de 1994, e igualmente esa misma densidad entre el 1º de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2000." (Véase también las sentencias SL14091-2016, SL17139-2016, SL625-2018, SL1523-2021 y SL4191-2021)

De acuerdo con ello, y atendiendo la prueba documental obrante en el plenario, se tiene que el señor José falleció el **7 de mayo de 1997**, no acredita con el solo tiempo cotizado al ISS hoy Colpensiones, 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ni 150 semanas en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la misma ley, ni la misma densidad dentro de los 6 años anteriores a su deceso, no obstante, no puede perderse de vista que **la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia a partir de la sentencia SL5147-2020**, cambió la postura que traía tendiente a indicar que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 049 de 1990, por la vía de la condición más beneficiosa, no era posible la acumulación de tiempos de servicio públicos sin cotización al ISS con los aportes sufragados a esa administradora del régimen de prima media, para en su lugar, modificar su jurisprudencia, e indicar que *"no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las semanas sufragadas a esa entidad."* (Sobre el particular véanse también las sentencias SL412-

2021, SL941-2021, SL2756-2021, SL5291-2021, SL919-2022, SL2634-2022, SL3454-2022).

De acuerdo con ello, al haber laborado el afiliado fallecido al servicio del Municipio de Nariño entre el 02 de enero de 1992 y el 28 de septiembre de 1996, encontrándose respaldado mediante bono pensional el lapso de 02 de enero de 1992 a 30 de junio de 1995, se tiene que con este periodo y el cotizado directamente a Colpensiones, el señor José, entre el 7 de mayo de 1997, fecha de su deceso, y el mismo día y mes de 1991 -6 años antes a su muerte-, acredita un total de 271 semanas, y entre el 01 de abril de 1988 y el mismo día y mes de 1994 -6 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993-, cuenta con 244,42 semanas, cúmulo suficiente para dejar causado el derecho a la prestación reclamada, bajo el principio de la condición más beneficiosa, y sumatoria de tiempo público y privado.

Reclamándose la pensión de sobrevivientes por la actora en calidad de cónyuge, le corresponde acreditar la exigencia de convivencia por el término de dos años continuos antes de la fecha del fallecimiento, atendiendo a que murió en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su texto original, sin que sea necesario distinguir para el efecto si se trata de pensionado o afiliado, pues así lo ha asumido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, supuesto que se encuentra soportado en los autos al haber contraído matrimonio el señor José Rubiel Valencia Montes y Luz Miriam Betancur Álvarez el 6 de julio de 1990, sin tener el registro ninguna nota marginal, adicional a que Ana Mercedes Álvarez Grisales, declaró que conoció la pareja conformada por Luz Miriam y José Rubiel, al ser la primera sobrina de ella y haberlos visitado una o dos veces al mes, y por ello constarle que los mismos convivieron aproximadamente 7 años, sin que en dicho lapso se hubiese presentado separación, adicional a que compartieron lecho,

techo y mesa durante este periodo. Afirma igualmente que de dicha unión nacieron Natalia y Juan David.

José Saúl Zuleta Álvarez, cuñado de Luz Miriam, y conocido de José desde la niñez, adujo que la pareja convivió por espacio de 7 u 8 años, compartiendo lecho, techo y mesa, hasta la fecha del deceso de José en mayo de 1997; y, Sigifredo Panesso Betancur, afirmó que el esposo de Luz Miriam era José y que dicha pareja compartió su vida durante 7 años aproximadamente, sin que hubiese existido separación antes de la fecha del deceso de José, y que de dicha unión nació Juan David y Natalia, supuestos que le constan, en razón a que es cuñado de Luz Miriam hace más de 40 años, y se visitaban más o menos cada 8 días.

Conforme al material probatorio allegado, analizado a la luz del artículo 61 del C.P.T y de la S.S., queda acreditado que la señora Luz Miriam y el señor José, convivieron en calidad de cónyuges por espacio superior a los dos años establecidos en la norma, antes de la fecha del deceso, circunstancia que le permite acceder a la pensión de sobrevivientes, debiéndose considerar que Natalia Valencia Betancur y Juan David Valencia Betancur, probaron con los registros civiles de nacimiento la filiación con José Rubiel Valencia Montes, por tal, la prestación tal y como lo determinó la juez de instancia, a la luz de lo establecido en el artículo 488 del C.S.T y 151 del C.P.T, debe reconocerse a la primera a partir del 3 de agosto de 2009, al haberla reclamado el mismo día y mes de 2012, siendo resuelta esta por parte de Colpensiones de manera negativa en los actos administrativos GNR 165072 de 2013, GNR 176418 de 2015, y GNR 282492 de 2015, notificados el 25 de septiembre de la misma anualidad, presentándose la demanda en los 3 años posteriores, para ser exactos el 1º de julio de 2016, pensión que inicialmente se reconoce en un 50% y a partir del 27 de mayo de 2014, en un 100%. Frente a Juan David Valencia Betancur, al haber nacido el 27 de mayo

de 1996, se tiene que arribó a los 18 años, el mismo día y mes de 2014, por lo que al haber interrumpiendo el fenómeno extintivo de la prescripción con la presentación de la demanda en los 3 años siguientes al cumplimiento de la mayoría de edad, le asiste derecho al pago de la pensión de sobreviviente desde el 7 de mayo de 1997, en cuantía de un 25% y, a partir del 27 de julio de 2009, cuando Natalia cumplió los 18 años, un 50%, hasta el 27 de mayo de 2014, al no haberse probado escolaridad. Con relación a Natalia, baste decir que fue declara la prescripción frente a las mesadas adeudas, sin que hubiese existido reparo frente a dicha orden.

Realizado el cálculo del retroactivo, en el grado jurisdiccional de consulta, en cuantía de un salario mínimo y en razón a 14 mesadas al año, al haberse causado con anterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, encontró el despacho, tal y como se evidencia en cuadro adjunto a la sentencia, suma ligeramente superior a la obtenida por la a quo para Juan David, y frente a Luz Miriam, arrojó suma idéntica, por lo que al conocerse dicho asunto en consulta, dable resulta confirma la sentencia, en cuanto al valor a reconocer a los beneficiarios y la forma en que se dispuso dicho pago.

Frente a la inconformidad relacionada con la condena a los **intereses moratorios**, es de indicar que en la sentencia SL2117-2022, donde se reitera lo expuesto en la SL3130-2020, la Corte preciso aspectos frente a este concepto, así: *i)* su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; *ii)* buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y *iii)* existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. Así, el retardo o mora se erige en el único supuesto

fáctico que desencadena los intereses moratorios, por lo que se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones, no obstante, para el caso dadas las pautas antes anotadas, se advierte una razón para la negativa de la prestación en el 2013 y 2015, la cual obedeció a que el fondo luego de examinar el caso a la luz de la normatividad y jurisprudencia vigente para la época, verificó que no se acreditó por el afiliado fallecido el número de semanas exigido, lo cual, encuentra fundamento, en tanto, como se analizó en el transcurso de la presente decisión, las semanas se logran acreditar en aplicación del principio de la condici3na más beneficiosa y la sumatoria de tiempo público y privado, supuesto, que si bien fue reconocido por la Corte Constitucional desde la sentencia SU769-2014, también lo es que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral solo acogió tal posición en el año 2020, luego, se impone la confirmación de la sentencia en cuanto absolvió del pago de los intereses moratorios y dispuso la indexación de las sumas adeudadas.

Se revoca la condena en costas, en tanto, los argumentos expuestos para la no concesión de los intereses moratorios, sirven de sustento para no imponer las mismas. Se itera, los demandantes debían acudir al proceso ordinario para la concesión del derecho en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y sumatoria de tiempo público y privado cuando se trata de pensiones de sobrevivientes.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca el numeral undécimo** de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luz**

Miriam Betancur Álvarez, Juan David Valencia Betancur y Natalia Valencia Betancur, en contra de **Colpensiones**, donde se dispuso la vinculación como litisconsorte necesario por pasiva al señor **Hernando Montoya Gallo**, para en su lugar absolver a Colpensiones de las costas impuestas. En lo demás se confirma la sentencia objeto de revisión.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

AÑO	VALOR 100%	VALOR JUAN DAVID 25%	NUMERO MESES CON 25%	Valor JUAN DAVID 25%	VALOR JUAN DAVID 50%	NUMERO DE MESES CON 50%	TOTAL ADEUDADO EN 50%	TOTAL ADEUDADO JUAN DAVID
1981								
1997	\$ 172.005	\$ 43.001	9,80	\$ 421.412,25	\$ 86.002,50		\$ -	\$ 421.412,25
1998	\$ 203.826	\$ 50.957	14	\$ 713.391,00	\$ 101.913,00		\$ -	\$ 713.391,00
1999	\$ 236.460	\$ 59.115	14	\$ 827.610,00	\$ 118.230,00		\$ -	\$ 827.610,00
2000	\$ 260.100	\$ 65.025	14	\$ 910.350,00	\$ 130.050,00		\$ -	\$ 910.350,00
2001	\$ 286.000	\$ 71.500	14	\$ 1.001.000,00	\$ 143.000,00		\$ -	\$ 1.001.000,00

2002	\$ 309.000	\$ 77.250	14	\$ 1.081.500,00	\$ 154.500,00		\$ -	\$ 1.081.500,00
2003	\$ 332.000	\$ 83.000	14	\$ 1.162.000,00	\$ 166.000,00		\$ -	\$ 1.162.000,00
2004	\$ 358.000	\$ 89.500	14	\$ 1.253.000,00	\$ 179.000,00		\$ -	\$ 1.253.000,00
2005	\$ 381.500	\$ 95.375	14	\$ 1.335.250,00	\$ 190.750,00		\$ -	\$ 1.335.250,00
2006	\$ 408.000	\$ 102.000	14	\$ 1.428.000,00	\$ 204.000,00		\$ -	\$ 1.428.000,00
2007	\$ 433.700	\$ 108.425	14	\$ 1.517.950,00	\$ 216.850,00		\$ -	\$ 1.517.950,00
2008	\$ 461.500	\$ 115.375	14	\$ 1.615.250,00	\$ 230.750,00		\$ -	\$ 1.615.250,00
2009	\$ 496.900	\$ 124.225	7,90	\$ 981.377,50	\$ 248.450,00	6,10	\$ 1.515.545	\$ 2.496.922,50
2010	\$ 515.000	\$ 128.750		\$ -	\$ 257.500,00	14	\$ 3.605.000	\$ 3.605.000,00
2011	\$ 535.600	\$ 133.900		\$ -	\$ 267.800,00	14	\$ 3.749.200	\$ 3.749.200,00
2012	\$ 566.700	\$ 141.675		\$ -	\$ 283.350,00	14	\$ 3.966.900	\$ 3.966.900,00
2013	\$ 589.500	\$ 147.375		\$ -	\$ 294.750,00	14	\$ 4.126.500	\$ 4.126.500,00
2014	\$ 616.000	\$ 154.000		\$ -	\$ 308.000,00	4,90	\$ 1.509.200	\$ 1.509.200,00
TOTAL GENERAL								\$ 32.720.436

AÑO	VALOR 100%	VALOR LUZ MIRIAM 50%	NO. MESES CON 50% LUZ MIRIAM	TOTAL VALOR 50%	VALOR 100% LUZ MIRIAM	NUMERO DE MESES CON 100%	TOTAL ADEUDADO EN 100%	TOTAL ADEUDADO LUZ MIRIAM
2009	\$ 496.900	\$ 248.450	5,93	\$ 1.473.308,50	\$ 496.900		\$ -	\$ 1.473.308,50
2010	\$ 515.000	\$ 257.500	14	\$ 3.605.000,00	\$ 515.000		\$ -	\$ 3.605.000,00
2011	\$ 535.600	\$ 267.800	14	\$ 3.749.200,00	\$ 535.600		\$ -	\$ 3.749.200,00
2012	\$ 566.700	\$ 283.350	14	\$ 3.966.900,00	\$ 566.700		\$ -	\$ 3.966.900,00
2013	\$ 589.500	\$ 294.750	14	\$ 4.126.500,00	\$ 589.500		\$ -	\$ 4.126.500,00
2014	\$ 616.000	\$ 308.000	4,90	\$ 1.509.200,00	\$ 616.000	9,10	\$ 5.605.600	\$ 7.114.800,00
2015	\$ 644.350	\$ 322.175		\$ -	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900	\$ 9.020.900,00
2016	\$ 689.454	\$ 344.727			\$ 689.454	14	\$ 9.652.356	\$ 9.652.356,00
2017	\$ 737.717	\$ 368.859			\$ 737.717	14	\$ 10.328.038	\$ 10.328.038,00
2018	\$ 781.242	\$ 390.621			\$ 781.242	14	\$ 10.937.388	\$ 10.937.388,00
2019	\$ 828.116	\$ 414.058			\$ 828.116	14	\$ 11.593.624	\$ 11.593.624,00
2020	\$ 877.803	\$ 438.902			\$ 877.803	14	\$ 12.289.242	\$ 12.289.242,00
2021	\$ 908.526	\$ 454.263			\$ 908.526	14	\$ 12.719.364	\$ 12.719.364,00
2022	\$ 1.000.000	\$ 500.000			\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000,00
2023	\$ 1.160.000	\$ 580.000			\$ 1.160.000			
TOTAL GENERAL								\$ 114.576.621